

2º La expresada sentencia ha causado ejecutoria, y debe producir los efectos respectivos.

3º Devuélvânse las actuaciones al Tribunal de Circuito, de que procedan, con copia certificada de esta sentencia para su conocimiento. Hágase saber y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron la primera Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José María Iglesias.*—*M. Auza.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*J. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia. México, Abril 24 de 1875.—*Enrique Landa*, secretario.

AUTOS

Promovidos por la Hacienda pública, con motivo de la cesion de bienes que D. Juan N. Margáin hizo en beneficio de sus acreedores.

Pedimento del O. Promotor fiscal

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: que en la audiencia anterior expuso, que se conformaba con el proyecto de graduacion presentado por el síndico, siempre que se entendiera que el único de los acreedores que debía pagarse antes que el fisco, debía ser la casa de los Señores Hernandez Herms. y Cº por lo que á estos se les debe, y que luego debía cubrirse lo de la Hacienda pública; porque en efecto, así parece en justicia que debe ser, pues siempre se reputó por de Margáin toda la casa y aun hasta él mismo la propuso en lugar de fiadores á la Administracion General del ramo; y solo ahora que ha hecho cesion de bienes, viene declarando, que la casa, la mitad, debe

TOMO VII.—PARTE II.

ser de sus hijas por su legítima materna. Al Fiscal no le incumbe entrar en las cuestiones que nacen naturalmente de tal declaracion hecha á última hora, y solo ha querido esponer el privilegio que tiene el Fisco por la hipoteca tácita legal que tuvo en los bienes del fallido, para ser preferido en el pago á los demás acreedores. Que con respecto á lo que se anuncia sobre no conformidad de Margáin con el cargo que le resulta en sus cuentas, basta solo saber que, la liquidacion de que resulta tal cargo, está hecha por una oficina que en sus operaciones mercede y debe dársele fé pública; que esta hecha tambien esa liquidacion con presencia de las mismas cuentas rendidas por el interesado, á quien sin duda hoy nada importa que sus bienes sean de la Nacion ó de sus demás acreedores; y últimamente que, mientras el espresado Margáin no conteste satisfactoriamente á esos cargos y á las observaciones claras y muy minuciosas que se le hicieron por la General del ramo, al glosarle sus cuentas, la Hacienda pública tiene á su favor la presuncion vehementísima de la legitimidad de su crédito, con lo que basta para que ella deba ser preferida en el pago á todo otro acreedor, no hipotecario privilegiado, expreso anterior.

Que hechas estas aclaraciones, está conforme con el proyecto de graduacion presentado por el Síndico del concurso, y pide que en tales términos se sirva ese Juzgado aprobarlo, mandando se haga efectivo pago á la Hacienda pública de lo que se le adeuda.

Monterey, 3 de Marzo de 1870.—*Lic. Elizondo.*—Una rúbrica.

Es copia que certifico. Monterey, Diciembre 14 de 1872.—*Antonio María Elizondo.*

Sentencia del O. Juez de Distrito.

Monterey, Setiembre 29 de 1871.

Vistos estos autos que comenzó á instruir el C. Juez 2º de Letras de esta Capital, con motivo del ocurso que el 25 de Mayo

de 1868 presentó el C. Juan N. Margain, haciendo cesion de bienes en favor de sus acreedores, por serle imposible satisfacer sus deudas en virtud de las circunstancias en que se hallaba: lo que espusieron los acreedores en su primera junta, admitiendo la cesion del C. Margain; el auto en que se decretó de conformidad, la nota que pasó este Juzgado de Distrito al de Letras, suplicando se inhibiera del conocimiento de este asunto y le remitiera los autos originales, por tener interes en ellos la Hacienda Federal, con motivo de la responsabilidad civil contraída por Margain en el desempeño de la Administracion principal de la renta del papel sellado en este Estado, cuyas cuentas se estaban glosando en la oficina superior respectiva, y se notaba un *déficit* de alguna consideracion: visto el auto de 26 de Noviembre de 1868, en que el Juez de Letras se declaró incompetente para conocer de este negocio; la remision de él á este Juzgado, las pruebas aducidas por las partes, el proyecto de graduacion presentado por el Síndico, la inconformidad con él de algunos acreedores, los alegatos en que se discutió ese proyecto, y lo demas que debió tenerse presente para la resolucion de este juicio.

Considerando: que el crédito del C. José María Hernandez valioso de quinientos cuarenta pesos, esta asegurado con una hipoteca especial registrada, que otorgó en su favor el C. Margain el dia 30 de Julio de 1866: que siendo esta la primera hipoteca de esta clase, el acreedor que la representa, debe ser preferido á los posteriores en tiempo y tambien al fisco por la tácita que le concede el derecho; leyes 27 y 33, tít. 13, parta. 5ª: que posteriormente á esta obligacion, contrajo el cedente la relativa al fisco, aceptando el empleo de Administrador del papel sellado, y desde el dia 18 de Setiembre de 1866 en que empezó á desempeñarlo, quedaron sus bienes tácitamente hipotecados á la responsabilidad que pudiera resultarle, segun lo disponen las leyes

23 y 25 tít. 23 Part. 5ª al hablar de los Administradores, arrendadores ó tributarios del fisco; de suerte que desde aquel dia la Hacienda Pública gosa de preferencia sobre las cemas sercadoras posteriores, ya tengan hipoteca tácita ó expresa, segun lo dispuesto en la ley 33 del mismo título y partida: que despues del fisco, sigue en órden D. José Casagne que aseguró su crédito de \$1860 00 es. mil ochocientos sesenta pesos con una hipoteca especial registrada, que otorgó en su favor el cedente el dia 27 de Octubre de 1866, y que de acuerdo con las disposiciones citadas, debe ser preferido á los hipotecarios posteriores de la misma clase: que despues de este señor viene el crédito del C. Francisco G Prieto por la cantidad de \$2000 00 es. dos mil pesos, asegurado con hipoteca tambien especial y expresa, habiéndose otorgado la escritura respectiva el 11 de Diciembre del mismo año de 1866, la que se declaró subsistente en la posterior que firmó el cedente el 1º de Octubre de 1867: que además de estas escrituras, el C. Gonzalez Prieto presentó el documento privado de fol. 3 del juicio acumulado á estos autos, promovido por él contra el cedente, en que aparece que este le entregó en prenda la casa contigua á la de su habitacion, ofreciéndole tambien hipotecarla en garantía de un dinero que le prestó, pretendiendo ahora que su escritura de hipoteca se retrotraiga á la fecha de aquel documento, que fué la de 15 de Setiembre de 1865, cuya solicitud es inadmisibile segun las leyes 1ª y 2ª, tít. 15, lib. 10 de la Nov. Rec. en las que se dispone que la hipoteca, no otorgada por medio de escritura pública, ni registrada en el libro respectivo, no haga fé ni se juzgue con arreglo á ella: que además de esta escepcion, el C. Gonzalez Prieto, opone contra el crédito del Sr. Casagne, la de que fué presentado despues que se concluyó el término concedido para las pruebas, y esta otra tampoco debe admitirse, porque segun asienta el mismo Casagne, sin contradiccion al-

guna de los demás acreedores, había presentado ya este documento ante el C. Juez 2º de Letras; debiendo tenerse presente, por otra parte, que esta clase de documentos pueden admitirse en juicio, no solo después del término probatorio, sino aun después de los alegatos de buena prueba, con tal que se proteste, como lo hizo Casugno al fin de su escrito, que no se hace de malicia; leyes 1ª, 2ª y 3ª, tít. 7º y 1º tít. 13, lib. 11 de la Nov. Rec., lo que está admitido en la práctica, para que no se pierda por una mera fórmula el derecho de las partes, principalmente cuando no haya sospechas de suplantación ó falsedad, como sucede en el caso; Pareja de edit inst. tít. 6º resol. 3ª, núms. 33 y siguientes; Murillo, lib. 2º, tít. 22, núm. 189; Escriche, art. "juicio civil ordinario" §18:

Considerando respecto de los bienes adventicios de las niñas Loreto y Concepción, hijas de Margán, representadas por un curador *ad litem* Lic. D. Simón de la Garza y Melo, que si bien algunos autores como Febrero de Tápia, lib. 3º, tít. 1º, cap. 2º, núm. 8, aseguran que el padre que tiene á sus hijos en su poder, no está obligado á hacer inventario solemne de los bienes adventicios de éstos, sino solo un apunte ó descripción ante un escribano y dos testigos; sin embargo, otros autores clásicos de mejor nota, siguiendo la regla general del derecho, sobre que todo administrador de bienes ajenos debe hacer inventario, comprenden en este deber al padre respecto de los bienes adventicios de sus hijos, lo mismo que á la madre; Valenzuela concilia juris, consulta 89, núm. 2, Escobar de ratio-ciniis cap. 3º, núm. 15 y cap. 9, núm. 14, ibi: "regula generalis constitui debet, ut omnis administrator quæ rationi reddendo pacto, lege, vel consuetudine est, adstrictus, inventarium rerum á se receptarum facere, et calculatoribus exhibere debeat, alias poenis legalibus subdatur: quod extendit etiam *ad maritum* superstitem, vel uxorem in retentione bonorum manentem,

ut tenet Ayora de partit. cap. 2 núm. 8:" que uno de los requisitos que debe tener un inventario, según lo dispuesto en la ley 5ª, tít. 6, part. 6ª, es que se empiece dentro de treinta días, y se concluya en tres meses, lo que sabiamente se ha prevenido con el fin de evitar que se consuman los bienes antes de ser inventariados: que otro de los requisitos según la ley citada, y las doctrinas de los prácticos, es que en el inventario se expresen las deudas pasivas con toda claridad y especificación.

Considerando: que, según el documento que obra á fs. 16 del cuaderno de pruebas de los acreedores, la esposa de D. Juan Margán falleció el 5 de Marzo de 1864, y los inventarios no se empezaron hasta Julio de 1868, después de promovido el concurso: que pasados no solo cuatro meses sino cuatro años, no puede darse crédito á este inventario, con el que se pretende justificar que la mitad de los bienes que existen ahora, pertenecen á las menores por sus adventicios que heredaron de la finada señora madre de ellas, puesto que con tal inventario no se ha probado que nomás los bienes que contiene existían en Abril de 1864, y que entonces nada debía la casa mortuoria: que lejos de haberse probado estos dos puntos importantes, los mismos autos presentan datos de donde se desprenden indicios en contrario, pues consta que el año de 1866, contrajo el Sr. Margán compromisos por valor de cerca \$5000 00 cs. que le facilitaron sus acreedores, sin que haya dado explicación alguna sobre la inversión de esta cantidad, de la que nada aparece en el inventario, siendo muy probable que se consumiera en pagar deudas anteriores, ó en gastos de la familia; y de uno á otro modo, es claro que este inventario no contiene todos los bienes ni las deudas pasivas, y que no estando aprobado por la autoridad, tampoco podría hacerse ahora sin someterlo á un juicio contradictorio con los acreedores que tienen interés en él: que por estos motivos los autores clásicos

asientan que el inventario es el fundamento de toda administracion, que ha de ser íntegro, que el que no se hace con las debidas solemnidades, no releva, y es lo mismo que si no se hiciera, presumiéndose mala fé en el que ha obrado de este modo; Valenzuela cons. 89 núms. 4 al 9: que además de estos fundamentos se debe tener presente que, segun lo dispuesto en la ley 24, tít. 13, part. 5ª, el padre puede enagenar sin necesidad de permiso judicial los bienes adventicios de sus hijos, y siendo válidas bajo este concepto las hipotecas contraídas por Margán, debe considerarse que esos bienes, aun suponiéndolos de sus hijas, fueron legalmente obligados y no deben reclamarse sino en lo que sobre, pagados los créditos á que estén afectos:

Considerando respecto del Fisco: que segun la última liquidacion de la oficina general del ramo del papel sellado, constante á fojas 60 del segundo cuaderno de estos autos, á D. Juan N. Margán le resulta un cargo de \$ 2,813 88 centavos, cuyo punto se halla todavia bajo la discusion judicial, pudiendo suceder que sea menos la responsabilidad que se le haga efectiva, si dá esplicaciones satisfactorias á las partidas observadas: que entre tanto se resuelve este asunto, no debe paralizarse el concurso, en perjuicio de los demas acreedores, siendo que los derechos de la Hacienda pública pueden quedar asegurados, depositándose la cantidad á que últimamente ha reducido su accion:

Considerando en fin, respecto de los acreedores quirografarios: que segun las disposiciones legales citadas, deben pagarse despues que los hipotecarios, y que si no alcanza para todos, debe distribuirse entre ellos á prorata lo que resulte, pagados aquellos.

Por las consideraciones y fundamentos espuestos, el C. Juez dijo: que debia reformar y reformaba el proyecto de graduacion presentado por el Síndico del concurso, reduciéndolo á estos términos:

1º Se pagarán los gastos del concurso:
2º El crédito de D. José M^a Hernandez:
3º El fisco por la cantidad que resulte en el juicio, sobre liquidacion de cuentas que se sigue contra Margán, depositándose \$ 2,813 88 centavos que reclama; bajo el concepto de que si fuere menos lo que se sentencie, la diferencia se entregará al acreedor ó acreedores que sigan en orden y no hayan sido satisfechos:

4º El crédito de D. José Casagnc:

5º El del C. Francisco G. Prieto, representado hoy por la casa de comercio de Madero y Compa. á quien lo traspasó últimamente: y

6º Los quirografarios por el total ó á prorata segun los bienes que quedaren; declarando que las hijas del cedente, por su herencia materna, solo tienen derecho á percibir lo que quede, pagados estos créditos. Notifíquese, y remítase copia de esta resolucion y del dictamen fiscal á la redaccion del Semanario Judicial de la Federacion, conforme á la circular de la Suprema Corte de Justicia de 31 de Diciembre último.

El C. Juez de Distrito de este Estado así lo resolvió, mandó y firmó por ante mí: doy fé.—*Lic. José María Martínez.—Anastasio A. Treviño.*

Es copia que certifico. Monterrey Diciembre 13 de 1872.—*Lic. José M^a Martínez.*

Pedimento del C. Promotor fiscal del Tribunal de Circuito.

C. Juez de Circuito.

El Promotor dice: que el presente juicio se ha seguido entre los acreedores de D. Juan N. Margán con motivo de la cesion de bienes hecha en favor de aquellos en 25 de Mayo de 1868. Para mejor tratar las cuestiones que se susciten, conviene fijar previamente los hechos tales como aparecen de autos.

En 5 de Mayo de 1864, murió la esposa del Sr. Margán, dejando dos hijas meno-

res, de su matrimonio, las Sritas. Loreto y Concepcion Margain; sin embargo, no se verificó por entonces la fraccion de inventarios, y ni entonces ni despues ha dicho que la finca hubiese introducido dote ó bienes extradotales al matrimonio, debiendo suponerse, en consecuencia, que los bienes existentes de la sociedad conyugal en aquella época, eran gananciales, pues tampoco Margain introdujo capital de que se tenga conocimiento. La mayor parte de los intereses matrimoniales que el cónyuge que sobrevivió, siguió administrando en comun, consistian en una casa, dividida en dos viviendas separadas, sita en la calle de Matamoras número 138 que el cónyuge supérstite, siguió administrando en comun como todos los demás. En 30 de Julio de 1866, el Sr. Margain hipotecó en favor de D. José María Hernandez en \$ 540, la vivienda del Oriente de las dos que forman la casa citada. El 18 de Setiembre del mismo año, se encargó de la Administracion Principal de Papel Sellado de esta Ciudad: á fines de Octubre siguiente, hipotecó en favor de D. José Casagne, por cantidad de \$ 1860, la misma parte de casa hipotecada con anterioridad á Hernandez, expresándose en la escritura de hipoteca *que no tenia ningún gravamen*, y en 11 de Diciembre de 1866, hipotecó á favor del Sr. D. Francisco Gonzales Prieto por \$ 2,500 la casa en que vivia el mismo hipotecante, que es la que forma la vivienda del Poniente del número 138 de la calle de Matamoras repetida: hipoteca que quedó reducida á \$ 200 pesos para el 1º de Octubre del año siguiente, segun nueva escritura otorgada, ampliando el plazo puesto en la anterior y prometiendo vender la finca hipotecada en caso de no pagar al vencimiento. Fuera de esos créditos, pesan contra el Sr. Margain, la responsabilidad que ha contraindo con el fisco, algunos otros de poca cuantía y lo que dice deber á sus hijas de herencia materna.

Destituido el Sr. Margain ó suspenso á

principios de Enero de 1868, sumariado por indicios de peculado, formuló cesion de bienes que, sustanciada en 1ª instancia, se resolvió por el Juzgado de Distrito en sentencia de 29 de Setiembre de 1871, haciéndose la siguiente graduacion de acreedores.

1º Que de los bienes concursados, se pagasen los gastos de concurso de toda preferencia. En segundo lugar, el crédito de D. José María Hernandez. En tercer lugar, al fisco por la cantidad que resultó debérsele en el juicio sobre responsabilidad pendiente con Margain, depositándose los \$ 2,813, 83 centavos, sobre que versa ese juicio, á reserva de entregarse al acreedor ó acreedores que sigan en orden sin haber sido satisfechos, lo que sobre de esa cantidad, si por la sentencia resultare menor la responsabilidad de Margain. En 4º lugar, el crédito de D. José Casagne. En 5º lugar, el de D. Francisco Gonzales Prieto, representado actualmente por la casa de Madro y Cª, en virtud de cesion formal que le fué hecha. En 6º lugar, los quirografarios y comunes, y en último, las hijas del cedente, por razon de su herencia materna. De esta sentencia, apeló el Sr. Lic. Simon de la Garza y Melo, curador *ad litem* de las niñas de Margain, apelacion á que se adhirió con posterioridad la representacion de Gonzales Prieto. Procederá el Promotor á ocuparse separadamente del lugar que á su juicio deba ocupar cada uno de los créditos enunciados, ocupándose precisamente del carácter con que deban considerarse á las hijas menores del cedente, en este concurso, á quienes su curador, el Sr. Lic. Garza Melo, pretende presentar como acreedores de dominio, en la mitad de los bienes cedidos.

Muerta la Sra. Dª Concepcion Treviño de Margain, debió su marido haber hecho inventarios para saber el estado de los intereses y la parte que en ellos tuvieran sus hijas; no lo verificó ni en muchos años despues, siguiendo en consecuencia, una sociedad tácita entre el cónyuge supérstite y

las herederas del que falleció. Que esta sociedad existió, es innegable: hasta ahora ninguna ley ni doctrina considera disuelta la sociedad legal por el simple hecho de la muerte de uno de los cónyuges: algunos sostienen que subsiste la sociedad conyugal hasta la facción de inventarios y partición de bienes; otros impugnando la opinión anterior, afirman que durante ese intervalo, hay una sociedad tácita legal: en comprobación de ello, puede verse al Sr. Acevedo en su comentario á la ley 2ª, tít. 4º libro 5º de la Recopilación; al Sr. García Gollena, en su Febrero reformado tomo 2º, pág. 100, fundado en la ley 6ª, tít. 4º libro 3º del Fuero Real; al Sr. Escribano, Diccionario de Legislación, palabra, «bienes gananciales», fundado en las doctrinas de Matienzo y del Dr. Sala, y á casi todos los jurisconsultos que han tratado la materia. Siendo esto así, las Sritas. Margáin no pueden considerarse como dueñas de la mitad de todos los bienes existentes, sino en cuanto queden cubiertas las responsabilidades, que su padre, verdadero administrador de los bienes sociales, haya hecho pesar sobre ellos.

D. Juan N. Margáin gravó los bienes sociales con créditos y responsabilidades que al fin no pudo cubrir, viniendo á hacer por ese motivo, cesión de bienes. Si se hubieran hecho inventarios en tiempo oportuno, el Sr. Margáin en su carácter de padre, podía muy bien con arreglo á derecho, enagenar los bienes de sus hijas, ley 24, tít. 13 Partida 5ª; con mucha mas razón pudo gravar ó enagenar los bienes de esa sociedad en que sus mismas hijas tenían parte con él; pero fuera de esas razones para no considerar como acreedores de dominio á las Sritas. Loreto y Concepción Margáin, otra muy grave tuvo presente el Juzgado al dictar su sentencia de 1ª instancia, y es que el inventario de bienes que viera á hacerse cuatro años y meses después de muerta la Sra. Treviño de Margáin, cuando ya estaba formalizada la ce-

sión, no podía mostrar el verdadero estado de los intereses conyugales á la época de su muerte. Esta observación que es notoria, está confirmada con los hechos: de Julio á Diciembre de 1866, Margáin contrae créditos por cosa \$ 5,000; para entonces era Administrador de Papel Sellado, tenía lo necesario para vivir con sus honorarios, no es un hombre vicioso ni derrochador, y por consiguiente, juzgando con prudencia, debe creerse que esas cantidades que tomó prestadas, fueron para pagar obligaciones contraídas con mucha anterioridad, esto es, anteriores á la muerte de su esposa: quizá había contraído deudas para comprar y fabricar esas mismas fincas presentadas al concurso y que ahora se trata de considerar como ajenas de responsabilidad á la época de la muerte de su esposa; pero él, interesado en que sus hijas sequen herencia, no es fácil confiese que en dicha época pesaban muchas deudas sobre la sociedad conyugal, si bien en la manera con que presenta á sus hijas como acreedoras, tácitamente lo confiesa. La fuerza de esas observaciones es tal, que el curador de las menores que goza la confianza del padre de ellas, no ha podido explicar en manera alguna, la inversión del producto de tales créditos.

De lo expuesto se sigue, que las Sritas. Margáin, no deben considerarse como dueñas, mas que de lo que sobre cubiertas las responsabilidades con que su padre gravó los bienes conyugales, y que después de hecha la cesión, la facción de inventarios es extemporánea é inútil, sin que pueda servir ni para saber qué bienes quedaron al fallecimiento de la señora su madre, ni á cuanto tengan ellas derecho.

Fijado ese punto, pasará el Promotor ya á ocuparse de la graduación.

Se han colocado en primer lugar los gastos de concurso, lo que es enteramente arreglado á derecho, no habiendo acreedores de dominio, por cuya razón, no ha sido contradicha esa colocación.

La sentencia de 1ª instancia, colocó en segundo lugar, el crédito de D. José Mª Hernandez, considerándolo como hipotecario especial, mas antiguo que los demás de igual clase. En apoyo de ésta calificación, está la ley 33, tit. 13, Partida 5ª; pero esa preferencia que el Juzgado calificó, sin distinción alguna, no gravita sobre todos los bienes de Margain, sino que únicamente sobre la parte de casa que le fué especialmente hipotecada. A continuación, colocó el Juzgado el crédito del Fisco, por lo que resulte deberlo el cedente, liquidadas que sean las cuentas de la Administración de Papel Sellado, durante el tiempo que fué á su cargo, sobre lo que se sigue juicio por cuenta separada. No ha podido negarse la preferencia del Fisco, sobre los acreedores hipotecarios posteriores, preferencia bien determinada en la ley últimamente citada; pero la representación del Sr. Gonzalez Prieto, le hace dos objeciones principales:

1ª Que la antigüedad de la hipoteca tácita legal de que goza el Fisco, debe computarse, no desde el 18 de Setiembre de 66, en que el fallido se encargó de la Administración del Papel sellado, sino desde la época en que *haya hecho algo en la Administración de que le resultó cargo ó deuda para con el Fisco.*

2ª Que no está justificado ni líquido el crédito fiscal, y por consiguiente, no hay deuda ni puede haber hipoteca, si bien habiendo una sentencia que causó ejecutoria, (pronunciada el 16 de Julio de 69, que al mandar terminar el juicio de concurso, cuya suspensión había pedido el Promotor interin se fallaba el de responsabilidad;) en cuya sentencia se mandó que quedase asegurada la acción fiscal, desde la fecha de ella, debía considerarse la acción hipotecaria.

En cuanto á la primera objeción, no es mas que un juego de palabras.

Deste el momento en que D. Juan N. Margain, se encargó de la Administración, recibió en valores de papel sellado una grue

sa suma, y era deudor al Fisco de esos valores; desde entonces, había deuda, había obligación y por consiguiente, de esa fecha data la hipoteca tácita legal. El señor Escribhe, hablando del fisco dice que algunos autores lo consideran preferente á los acreedores de hipoteca expresa respecto de los frutos de los bienes hipotecados habiendo nacido despues *del contrato fiscal*: esas palabras «contrato final» suponen que la hipoteca data desde la fecha en que se celebre y no de aquella en que vaya á hacerse la liquidación. Si las cosas debieran entenderse como pretende la parte de Gonzalez Prieto, en las hipotecas expresas no se computaría la antigüedad, desde la fecha de su otorgamiento, sino desde la fecha puesta como plazo para el pago de la deuda, puesto que antes de esa fecha no hay obligación de pagar, ni puede ser demandado un crédito. Las acciones hipotecarias, son garantías para el cumplimiento de obligaciones futuras; pero garantías que preexisten á esas obligaciones, no son garantías accesorias como la de la fianza. Las palabras «cuando se constituye hipoteca por una deuda ó obligación que no se ha contraído todavía pero que se piensa contraer &c.» de la doctrina del Sr. Escribhe que cita el representante de Gonzalez Prieto, en apoyo de sus apreciaciones, no tienen aplicación en el caso; ellas no se refieren á hipotecas otorgadas para el aseguramiento de contratos futuros que se celebrarán ó no, y bajo ese concepto es exacto que la hipoteca debe considerarse desde el tiempo en que el contrato se celebra; mas contrayéndonos á la cuestión, el contrato entre Margain y el Fisco se efectuó cuando aquel recibió el papel sellado y desde entonces existe la hipoteca sobre un contrato ya hecho, sobre una deuda ó obligación ya existente, hay la casa principal y puede darse la accesoría.

Es un error creer que no está probado el crédito del fisco, lo que no está es líquido, siguiéndose aún el juicio sobre liquidación: de autos consta que Margain fué Adminis

trador de Papel Sellado desde el 18 de Setiembre de 66, y que por consiguiente desde entonces recibió menos lo que la Administración General de la renta, diga deber abonársele, ó el ó los sucesores en sus derechos prueben que ha abonado. Ni es un obstáculo para colocar al fisco en la sentencia en el lugar que le corresponda lo ilíquido del crédito, como no lo es para hacer la colocacion de los gastos de concurso que aun están ilíquidos.

Disputándose sobre si el juicio de concurso debía ser suspendido hasta la terminacion del de responsabilidad seguido contra Margáin, se resolvió por esa Superioridad se continuase, no obstante lo ilíquido del crédito, con expresa declaracion de que si llegaba el caso de hacer pago á los acreedores particulares antes de liquidarse el crédito fiscal, quedase este asegurado competente, resolucion que tuvo por fundamento, entre otros considerandos, el que al crario nacional no podia seguirsele un perjuicio de la continuacion, porque una vez fijado el lugar en que debía pagársele lo que se le debiera, aunque antes se hiciese el pago á los otros acreedores, cada uno de los que recibiesen algo sin ser su crédito preferente al del fisco, debía otorgar fianza de devolver lo necesario para el pago de este. Esa sentencia previó el caso que se dá imponiendo á los acreedores la obligacion de reconocer la preferencia del fisco en el lugar en que se le colocara aunque su crédito fuese ilíquido, dió derecho al Fisco para que se hiciese esa calificacion; y como tal fallo causó ejecutoria, nada puede objetarse que pueda desvirtuarse.

El Sr. Lic. Morales representante del crédito de Gonzalez Prieto, se ha ocupado de impugnar uno de los fundamentos de la sentencia de 1ª instancia, que consiste en la prevencion de la ley n.º 25, sino 26 del tít. 13, Part. 5ª, y se apoya para impugnarlo en la glosa 6ª del Sr. Gregorio López. *In delictis-tamen fca.*: esa palabra *tamen* está demostrando, que es una escepcion de la re-

gla general para que en los delitos la accion hipotecaria nazca de la sentencia, y se confirma con las palabras subsiguientes, *nisi delinquatur circa administrationem fiscalem*. Aquí no se trata de delito sino de lo que Margáin recibió, sobre cuyo pago es incontestable el derecho del fisco, sin embargo de que pueda resultar una incidencia criminal; aquí lo principal no es el delito, sino la obligacion civil, y nunca lo principal está subordinado á lo accesorio.

Siguiendo el orden de antigüedad de las hipotecas, colocó el Juzgado á continuacion del Fisco el crédito de D. José Casagne; la colocacion es buena; pero no sobre toda la finca, sino únicamente sobre la vivienda del lado del Oriente que era la que estaba hipotecada.

Continúa en el orden de graduacion el crédito del Sr. Gonzalez Prieto: es el orden que le corresponde segun la fecha de su escritura. Siguen los créditos quirografarios y comunes, y se declara que si algo sobraba pertenecería á las hijas del cedente por razon de su herencia materna: sobre esto yá el Promotor ha expuesto las razones en que se funda para creer que las S.ñoritas Margáin deben ocupar el último grado en la graduacion.

Por lo expuesto el Promotor concluyo proponiendo:

1ª Se confirme la sentencia de primera instancia en la colocacion que dió á los gastos de concurso, crédito de Hernandez, crédito fiscal, créditos quirografarios y comunes y de las hijas del cedente.

2ª Se reforme la colocacion dada al crédito de D. José Casagne, declarándose que ocupará el cuarto lugar tan solo en lo que sobre cubiertos los anteriores, del valor de la vivienda del lado de Oriente de la casa número 138 de la calle de Matamoros.

3ª Se reforme la sentencia en la colocacion dada al crédito Gonzalez Prieto; colocándose en el cuarto lugar sobre el valor de la vivienda del Poniente de la casa citada.

4ª Como los gastos de concurso y crédito

to fiscal gravitan indistintivamente sobre las viviendas y los otros hipotecarios sobre una ó otra de ellas, se declare que vendidas separadamente y los demás bienes también por separado se haga el pago de la manera siguiente: que se vendan separadamente los bienes distintos de la finca y de una de las viviendas en que ésta está dividida: el producto de los primeros se invierta en los gastos de concurso y si algo faltare se complete por mitad del valor de una y otra vivienda, así como si sobriase seumente el sobrante por mitad á una y otra: que del valor de la vivienda del Oriente se pague el crédito de D. José M. Hernandez; que el crédito fiscal se saque por mitad del valor de la vivienda del Oriente y de la del Poniente, y si algo faltare de la primera para completar la mitad del crédito se tome de la segunda; que hechos así los pagos, lo que sobre de la vivienda del Oriente, se aplique á D. José Casagne, y de la del Poniente, á D. Francisco Gonzalez Prieto, siguiéndose en lo restante el órden de graduacion.

Monterey, Setiembre 5 de 1873.—*Rafael E. de la Garza.*

Es copia que certifico. Monterey, 28 de Marzo de 1874.—*Lic. S. Roel.*

Sentencia del Tribunal de Circuito.

Monterey, Marzo 10 de 1874.

Vistos los autos que principiaron á formarse ante el Juzgado 2º de Letras de la 1ª fraccion judicial del Estado, por la cesion de bienes que hizo el C. Juan N. Margán á sus acreedores, en 25 de Mayo de 1868, para eximirse de las obligaciones que reportaba y no lo permitian cumplir las circunstancias en que se hallaba, nominando entre estos á sus dos hijas menores Loreto y Concepcion, habidas en su matrimonio con Dª Concepcion Treviño y Peñeyra, que falleció en 5 de Marzo de 1864, por sus legítimas maternas, cuyos bienes y valores, estaban confundidos en la masa de bienes de que no habia hecho los inventa-

TOMO VII—PARTE II.

rios y particion correspondientes, y manifestando, que los bienes listados con el valor de catorce mil trescientos sesenta pesos, eran gananciales del matrimonio, con excepcion de una cómoda de caoba: las actuaciones referentes al nombramiento del C. Lic. Simon de la Garza y Melo como curador de las menores, junta de acreedores, su aceptacion, nombramiento de síndico del concurso y auto en que se admitió la cesion: las gestiones que por cuerda separada hizo el C. Francisco Gonzalez como acreedor, para que el deudor cumpliera la obligacion contraida sin mezclarlo en el concurso, y las diligencias que promovió el curador para el inventario y aplicacion de bienes, las que quedaron en estado de procederse á la particion: vistas las piezas y actuaciones conservientes á la traslacion del negocio al conocimiento de la jurisdiccion de Hacienda, con motivo del interes fiscal de la Nacion, procedente de cargos hechos por la oficina liquidataria al deudor comun en el exámen de la cuenta que éste rindió al separarse de la Administracion Principal de Papel Sellado: el artículo que suscitó el Promotor sobre suspension del juicio principal y sus incidentes, hasta la liquidacion definitiva de la responsabilidad civil del cedente, para con el Fisco, el que sustanciado con audiencia del síndico y resuelto en 1ª instancia en el sentido de continuacion, se sometió al conocimiento superior á virtud de apelacion interpuesta y fué confirmada la resolucion del C. Juez de Distrito, por auto superior de 16 de Julio de 1869, con declaracion de quedar asegurado el interés nacional, en el evento de hacer pago á los acreedores particulares antes de liquidarse: Vistas las pruebas rendidas, consistentes en escrituras públicas de hipoteca especial, con notas de registro en el libro cuarto del Becerro de esta Ciudad, bajo los números 272, 282 y 288, en una libranza aceptada y en lista de créditos pasivos: Vistos, el proyecto del síndico sobre graduacion de créditos y los escritos en

que los acreedores procuraron fundar la preferencia que les correspondia en el pago: Vista la sentencia de 1ª instancia en que se resolvió fueran satisfechos en primer lugar los gastos de concurso; en segundo el crédito de la casa de Hernandez; en tercero el fisco por la suma que resulte en el juicio que se sigue contra Margáin sobre liquidacion, disponiéndose el depósito de dos mil ochocientos trece pesos, ochenta y tres centavos, último cargo hecho por la oficina que glosó la cuenta, bajo el concepto de entregarse, lo que resulte ménos al definirse la liquidacion, á los acreedores que sigan en el orden de pago y no hayan sido satisfechos; en cuarto: el crédito de D. Jose Casagne; en quinto: el del C. Francisco Gonzalez Prieto, ó casa de Madero por traspaso, y en sexto: los acreedores quirografarios por el total ó á prorata, segun lo permitiese el valor de los bienes; declarándose que las hijas del cedente, por su herencia materna solo tenian derecho á percibir lo que sobra, pagados todos los créditos: Vista la apelacion que el curador de las menores interpuso de la sentencia, á cuyo recurso adhirió la representacion de la casa de Madero: los escritos en que el curador y acreedores procuraron fundar sus derechos de prelación y el dictámen fiscal: Oídos los fundamentos espuestos en los informes para la vista y lo demás que convino y debió tenerse presente para la resolucion de las cuestiones que ofrece el negocio en su estado.

Considerando: que en el cuaderno de pruebas se registran de fojas 13 á la 20, los documentos auténticos y su formal cotejo que acreditan el matrimonio de Margáin con Dª Concepcion Treviño y Pereyra, la filiacion legítima de las Señoritas Loreto y Concepcion Margáin y Treviño, y la inhumacion del cadáver de la madre en 5 de Marzo de 1864; que en autos no aparece constancia alguna de que la señora hubiese hecho testamento, ni de que antes de la cesion se practicasen inventario y division de bienes

entre el cónyuge supérstite y las hijas del matrimonio; que el escrito de cesion contiene la manifestacion de no haber llevado los cónyuges al matrimonio, bienes algunos y ser todos los que comprende la lista adjunta al escrito de cesion, los que se adquirieron durante la sociedad conyugal, con escepcion de una cómoda de caoba: que nada se predica en los autos sobre ocultacion de bienes, ni desprenden luz alguna sobre adeudos del matrimonio ó otros anteriores á los representados en el concurso: que el fallecimiento de la señora Treviño produjo, segun derecho, sucesion de las hijas en el dominio de la mitad de lo que marido y mujer adquirieron; que este dominio, aunque sin referirse á bienes determinados, no pudo perderse ó prescribirse en el tiempo que transcurrió desde la muerte de la señora hasta la promocion del inventario, hecha despues de formado el concurso y admitida la cesion, por ser imprescriptibles las acciones *familiares* *circumscribas* y *communis dividendo*, entre los que poseen bienes en comun, ley 2ª, tít. 8º, lib. 11 de la Nov. Recopilacion: que los acreedores como sucesores en los bienes y derechos del cedente y conocimiento de la comunione de intereses, no pudieron hacer suyos los bienes de personas con quienes no habian contraido; y en el hecho de admitir la cesion con los pormenores que contiene el escrito relativo, contrajeron la obligacion de respetar y separar la mitad de los bienes para las hijas de Margáin; mostrándose esta intencion además, en el hecho de intervenir el Síndico en las operaciones del inventario como representante del concurso, circunstancias que, ante la ley 1ª, tít. 1º, lib. 10 del mismo Código, fundan y establecen obligacion en el sentido propuesto: que la comunione de bienes continuada despues de la muerte de la señora, no funda en derecho la permanencia de la sociedad conyugal, por ser esta especial y restringida segun las leyes, al matrimonio que dejó de ser con la muerte de la señora; que nuestra legislacion y práctica no admiten sociedades que no

procedan de un contrato formal; y aun cuando, atendida la opinion de algunos comentadores, se entiende establecida una sociedad entre el cónyuge que sobrevive y sus herederos por la comunión de intereses, ésta en el caso no tendría lugar, á virtud de la menor edad de las hijas de Margáin, quienes para constituirla expresamente necesitaban la intervencion de un curador y nunca se sujetarían á pérdidas, de que podrían librarse con el recurso de restitucion que las leyes conceden á los menores en los actos y contratos de que le resulta daño ó menoscabo en sus intereses, daño que pueden reclamar durante su menor edad y cuatro años después de terminada esta: que carece de sólidoz en el presente caso el razonamiento sobre que el padre puede gravar y enagenar los bienes adventicios de los hijos que tiene bajo su potestad, porque en ninguna de las escrituras que otorgó el C. Margáin, aparece gravára ó enagenara bienes algunos de sus menores hijas, á cuya circunstancia es de añadase la consideracion de que la ley 7ª, tít. 13, Part. 5ª, al designar la persona que puede empeñar las cosas, dice con claridad: pueden hacerlo los que tienen dominio en ellas; y la 24 del mismo título y Partida, prohíbe á los padres enajenar los bienes adventicios de sus hijos: «no los deben enajenar en ninguna manera,» son sus palabras; y si bien en seguida, proponiéndose el hecho de enagenacion, dispone que los hijos respeten el acto de su padre, tambien establece la hipoteca de sus bienes para cubrir el valor de los enajenados, y no siendo bastantes los del padre, les concede el derecho de recuperar los vendidos de poder del que los tenga; por manera, que aunque Margáin hubiera enagenado ó gravado la parte de bienes cuyo dominio pertenecía á sus hijas, la enagenacion sería rescindible y el gravámen ineficáz ante la ley, por el defecto de dominio: que no aparece sometido á cuestion, el concepto de que los bienes listados y apreciados fueron gananciales adquiridos en el matrimonio, puesto que el

deudor así lo asienta en la cesion y no se registra prueba en contrario, ya en el sentido de que parte ó el todo perteneciera exclusivamente al marido, ya en el de que éste los adquiriese después de disuelto por el fallecimiento de su mujer; lejos de ello las escrituras de hipoteca se refieren á bienes existentes, y el razonamiento de los acreedores en el juicio, dá por sentado el concepto enunciado: que el dominio de los hijos de un matrimonio en la mitad de los gananciales, descanza en la ley que arregla las sucesiones; y las formalidades del inventario y particion, no tienen por objeto probarlo, y solo conspira á determinar los bienes y valores de lo que corresponde á cada uno de los sucesores y cónyuge que sobrevive: que en el caso ocurrente, no falta sino la formalidad de la particion, para que separado el haber de las menores por sus legítimas maternas, se designe el residuo de bienes y valores con que deben cubrirse las demas obligaciones del cedente.

Considerando que en el predicamento de comunión de bienes, las hipotecas especiales en sus relaciones sobre preferencia de pago, no debe estimarse que imponen gravámen á determinada finca, puesto que sobre ninguna se tenia dominio exclusivo por el cedente, sino que deben concretarse y referirse á la mitad del valor de cada uno de los departamentos del edificio gravado, por estar limitados los derechos del deudor á este respecto, y entenderse que hipotecó solamente sus derechos en el estado de indivision que guardaban los bienes: que después del crédito de dominio de las señoritas Margáin, viene el singularmente privilegiado de los gastos de concurso, segun doctrina comun de los comentadores y casuistas á que se ha arreglado la práctica de los Tribunales: que en tercer lugar debe colocarse el pago de la suma de quinientos cuarenta pesos acreditada en la escritura pública que se registra á fojas 1 y 2 cuaderno de pruebas, otorgada á favor de D. José María Hernandez, en 30 de Julio de 1866, en la

que aparece hipotecó el otorgante, el departamento del Oriente de la casa comun situada en la calle de Matamoros bajo el número 132, crédito que prefiere al fiscal de la Nacion, atendido el tenor de la ley 33 título y Partida citados, por ser hipotecario anterior y expreso: que aunque en el orden de pago debía seguir el crédito fiscal conforme á las leyes 23 y 25 del mismo título y partida, las piezas que se registran desde fojas 4 hasta la 9 inclusive del mismo cuaderno, no comprueban el crédito y solo refieren operaciones que tendian á la liquidacion de la cuenta girada por Margáin sobre la Administracion principal del ramo de papel sellado, de que se encargó en Setiembre de 1866 y manejó hasta Enero de 1868: que en el trascurso de seis años no se ha exhibido una constancia formal que acredite el haber del fisco y responsabilidad del que administró el ramo expresado, omision que deja inseguro el interés nacional, salva la responsabilidad del agente omiso ó tarde en el cumplimiento de sus deberes: que los Jueces y Tribunales no deben admitir interpolaciones sobre valores ó objetos indeterminados, y tienen que fallar segun lo alegado y probado: que el secuestro, dispuesto en la sentencia apelada para asegurar la accion fiscal en el evento de que se averigüe la responsabilidad del cedente, no descansa en ley alguna y envuelve un ataque á los derechos de los acreedores que han comprobado sus créditos y merecen ante la ley ser pagados previa fianza de acreedor de mejor derecho que deberá exigirse en el caso de súplica, conforme á la ley 10, tít. 32, lib. 11 Nov. por si en la última instancia, si es que la tiene el negocio, llegare á comprobarse el crédito y resolverse su solucion: que el crédito de D. José Casagne, comprobado y asegurado con la escritura y nota de registro de fojas 21 y 22 cuaderno de pruebas, entra en el orden de pago, despues de cubierto el fisco en su caso, por importar un gravámen expreso en el departamento hipotecado antes á favor de Her-

nandez, circunstancia que limita la accion real al residuo de la mitad de su valor, pudiéndose estender á los demas bienes que no reporten gravámen expreso por la parte personal de ella: que el crédito que representa la casa de Madero y acredita la escritura de hipoteca especial y no la de registro de las fojas 4 y 5, cuaderno segundo, viene despues de la accion fiscal, en el evento de que esta proceda, sobre la mitad del valor del departamento de Occidente que no aparece haber sido gravado expresamente á otro por el deudiente á los valores que produzca la venta de los demas bienes que en la particion se adjudiquen al cedente, despues de cubierto el crédito de Casagne; y que al pago de los créditos hipotecarios debe seguir el de la libranza aceptada á favor de Martinez Cárdenas hermanos, estendida en el papel sellado correspondiente á su valor, por ser preferente á los demas créditos quiregrafarios que solo proceden de la confesion del deudor, conforme á lo dispuesto en la ley 5ª, tít. 24, lib. 10 de la Novísima Recopilacion.

Apoyado en las consideraciones precedentes y leyes de la materia, el C. Ministro 2º suplente que forma este Tribunal, dijo: que debia de reformar y reformó la sentencia de 1ª instancia, disponiendo:

Primero: Procedase á la formal division por mitad de bienes entre el cedente y sus hijas las señoritas Loreto y Concepcion, excluyéndose de ella la cómoda enuncida en la parte expositiva, como perteneciente al concurso; y practicada la operacion, entréguese á las hijas, en especie, los bienes de su adjudicacion.

Segundo. Subástense los bienes que resulten del cedente, y con su valor cúbranse en primer lugar los gastos de concurso, en seguida el crédito de la casa de Hernandez con la mitad del valor del departamento del Oriente de la casa comun, destinándose el residuo de esta mitad al pago del de Casagne, y la mitad del valor del otro departamento á cubrir el crédito que representa la

casa de Madero. Esto sea sin perjuicio de que uno de los departamentos de la casa número 138 calle de Matamoros, se adjudique á las hijas del mismo cedente en pago de sus legítimas. Del resto del valor de bienes, páguese el deficiente de Cassagno; si sobraro, cubrase lo que no se haya satisfecho á Madero; despues de pagado este crédito, lo será el de Martinez Cárdenas y Hermanos y por último los demas quirografarios.

Tercero. No se considere en el pago, censo alguno posterior al acto de la cesion.

Cuarto. Exítese por Secretaría al C. Juez de Distrito, para que active el juicio sobre responsabilidad del cedente al fisco Nacional, á fin de que obre en su caso los efectos legales; pudiendo intervenir los acreedores posteriores á la casa de Hernandez.

Quinto. Notifíquese, dése cuenta y librense las copias de estilo.

Así definitivamente juzgando, lo resolvió y firmó el expresado C. Ministro, por ante mí; doy fé.—Firmados.—*Doningo Martinez.*—*Amado Valdéz*, secretario.

Es copia que certifico. Monterey, Marzo 20 de 1874.—*Amado Valdéz*, secretario.

Pedimento del Procurador general de la Nacion.

El Procurador General interino dice: que el C. Juan N. Margáin, en 25 de Mayo de 1869 se presentó ante el Juzgado 29 de Letras de la 1ª fraccion judicial de Monterey, haciendo cesion de bienes en favor de sus acreedores, la que fué admitida por auto de 20 Junio del mismo año, de conformidad con lo acordado por los acreedores en la junta de ley.

En este estado, el mencionado Juzgado 29 se declaró incompetente para seguir conociendo del concurso, en virtud de la competencia que le suscitó el Juzgado de Distrito de Nuevo Leon, pretendiendo avocarse el conocimiento del negocio, por el interes que tiene el Fisco Federal en dichos bie-

nes, á causa del descubierto que resultó contra el C. Margáin en la Administracion del Papel Sellado que fué á su cargo, disponiendo en consecuencia, se le remitiesen los autos con todos sus incidentes; por este motivo el Juzgado de Distrito continuó en el conocimiento de ellos hasta pronunciar sentencia en 29 de Setiembre de 1871, haciendo la siguiente graduacion de acreedores: Los gastos del concurso deberán ser pagados de toda preferencia, de los bienes concursados; en seguida el crédito de D. José Mª Hernandez, por la hipoteca expresada y especial con que se encuentra asegurado, registrada en 30 de Julio de 1866; é inmediatamente despues de este crédito viene el del fisco federal, por la preferencia que le corresponde sobre los demás acreedores posteriores al 18 de Setiembre de 1866, en que comenzó Margáin á desempeñar la Administracion del Papel Sellado, ya tengan hipoteca tácita ó expresa, segun lo previene la ley 33, tit. 13 Pª 5ª; en consecuencia deberán depositarse los \$ 2.813 del crédito, á reserva de entregarse al acreedor ó acreedores que sigan en orden sin haber sido satisfechos, lo que sobre de esa cantidad. Ocupan los lugares restantes en la graduacion, los acreedores hipotecarios posteriores al fisco, mandándose pagar en último lugar á los quirografarios y comunes, y declarándose, que las hijas del cedente por razon de su herencia materna, solo tienen derecho á percibir lo que quede, pagados estos créditos.

Para decidir la apelacion que de la anterior sentencia interpuso el C. Lic. Simon de la Garza y Melo, como curador ad-litem de las hijas de Margáin, apelacion á que se adhirieron posteriormente los demás acreedores; el Tribunal de Circuito de Monterey, tuvo presente: que los bienes concursados pertenecian á los gananciales habidos durante el matrimonio del deudor comun con la Sra. Dª Concepcion Treviño y Perea y por lo mismo la mitad de ellos era en dominio y propiedad de las menores

Margáin, sin que puedan estar afectos al pago de los créditos del concurso, porque estos gravámenes fueron contraídos posteriormente á la muerte de la Sra. Treviño, no pudiendo decirse que una vez disuelta la sociedad conyugal, se continuó ésta, ni se contrajo otra nueva, entre conyuge su perviviente y sus hijos, porque nuestra legislación y práctica no permite sociedades que no procedan de un contrato formal. A esto se agrega, que los acreedores como sucesores en los derechos y bienes del cedente y con conocimiento de la comunión de intereses, no pudiendo hacer suyos los bienes de personas con quienes no habían contraído; y en el hecho de admitir la cesión con los pormenores que contiene el escrito relativo, contrajeron la obligación de respetar y separar la mitad de los bienes para las hijas de Margáin, mostrándose esta intención además, en el hecho de intervenir el Síndico en las operaciones del inventario, como representante del concurso, circunstancias que ante la ley 1ª, tít. 1º, libro 10 de la N. R., fundan y establecen obligaciones en el sentido propuesto. Por último, tuvo presente, que en ninguna de las escrituras que otorgó el C. Margáin aparece, gravara ó enagenara bienes algunos de sus menores hijas; por lo que cree, que no puede tener lugar en este caso el principio de que el padre puede gravar ó enagenar los bienes adventicios del hijo que está bajo su potestad, tanto mas, cuanto que en el caso de haberlo hecho, se rescindiría dicha enagenación, según la ley 7 tít. 13 Pº 5º siendo nula por falta de dominio.

Mediante estas consideraciones, revocó la sentencia del inferior de 10 de Marzo del corriente año, previniendo que se procediese á la formal división por mitad de los bienes, entre el cedente y sus hijas las S. ñoritas Loreto y Concepción, excluyéndose de la división una cómoda que pertenece al concurso, y practicada la división, entréguese á las hijas los bienes de su adjudicación. La mitad de los bienes concursados,

deducido el crédito de dominio de las S. ñoritas Margáin, previno se subastase y con su valor se cubriese en el siguiente orden: los gastos del concurso, la hipoteca de Hernandez, en seguida los demás hipotecarios posteriores, y por último los quirografarios.

En la anterior sentencia que queda extractada, conservando sin embargo las mismas palabras del C. Magistrado de Circuito, no fué considerado el crédito que reclama el Fisco federal, no obstante que el mismo Magistrado es de opinión que le corresponde el tercer lugar en la graduación; pero teniendo en cuenta que el crédito está ilíquido, y que los Tribunales no deben admitir interpolaciones sobre valores ó objetos indeterminados, juzgó que solo era prudente, para evitar el agravio que á su juicio se infería á los acreedores por el secuestro preventivo dictado en 1ª instancia, excitar al C. Juez de Distrito para que active el juicio sobre responsabilidad del cedente al Fisco federal, á fin de que obren en su caso los efectos legales.

El que suscribe cree, que es de revocarse la expresada determinación del Tribunal de Circuito, porque para esto basta considerar que muerta la Sra. Treviño, sus hijas continuaron viviendo juntas, continua y diariamente con el Sr. su padre, gastando de una misma mesa y caudal, el que permaneciendo proindiviso, renovó y estableció tácitamente la sociedad conyugal entre ellas y el Sr. su padre, porque estos actos contra la opinión del C. Magistrado de Circuito, no pueden hacerse fuera del derecho, leyes y reglas de dicha sociedad, como lo enseña Febrero de Tépis, tomo 1º, lib. 1º, tít. 2, Cap. 10, § 28; así es que, en caso de división de los bienes gananciales que pertenecen á los menores, habrá primeramente que deducir los créditos del concurso, puesto que ellos fueron contraídos durante esta sociedad. Por otra parte, el Sr. Margáin, como padre de las S. ñoritas Loreto y Concepción, es dueño del usufructo y legítimo administrador de los bienes adventicios de sus

hijas, lo cual le da facultades mas amplias que á los administradores comunes, de tal manera que la ley 24, tít. 13, Part. 5ª lo autoriza para poder libremente gravar ó enagenar dichos bienes adventicios; de aqui resulta que en el caso que nos ocupa, los gananciales que puedan pertenecer á las Señoras Margáin, se encuentran afectos al pago de los créditos del concurso, sin que pueda eximirlos de ello la circunstancia de no haberse expresado en las escrituras, el que los bienes gravados fuesen los adventicios, pues á esta circunstancia no estaba obligado el Sr Margáin, y mucho menos sus acreedores; no el primero, porque era dueño proindiviso de dichos gananciales, legítimo administrador y coheredero forzoso abintestato, segun la ley de 10 de Agosto de 1857; tampoco estaban obligados á ello los acreedores, porque á la seguridad de sus créditos les bastaba saber que los bienes hipotecados pertenecian al concursado, y esto consta en las escrituras respectivas, y de esto da fé el Escribano ante quien fueron otorgadas, no siendo cierto que los acreedores por el hecho de aceptar la cesion, estaban obligados á separar de los bienes concursados la mitad para las hijas del deudor comun, porque la ley 1ª tít. 1º lib. 10 de la N. R. que en apoyo de este concepto cita el Tribunal de Circuito, ni previene tal cosa, ni de su contesto pueden deducirse las apreciaciones que hace dicho Tribunal para prevenir en su sentencia que se apliquen á las hijas del deudor la mitad de sus bienes; ni á esto induce tampoco el que el Síndico del concurso haya concurrido á las diligencias que el C. Lic. Melo, como curador ad litem de las menores, promovió ante el Juzgado del fuero comun, porque para tales diligencias carecia de las facultades necesarias, supuesto que solo habia sido nombrado para representar á las menores en el concurso á bienes de su padre, y no para la guarda y seguridad de los bienes de las mismas, por lo que no pueden considerarse legítimas tales diligencias, supuesta la falta de personali-

dad en el curador que las promovió. De todo lo expuesto se deduce que, las hijas de D. Juan N. Margáin, no pueden ser consideradas en la sentencia de graduacion como acreedores de dominio, para el efecto de que se les aplique la mitad de los bienes concursados con perjuicio de los demas acreedores, sino que deducidos todos los créditos á que estan afectos los repetidos bienes, la parte sobrante será la única que podrán llevar, siendo en esto perfectamente justa y legal la sentencia pronunciada por el Juzgado de Distrito.

Revocada la sentencia de 2ª instancia, en este punto recobran el lugar que les corresponde los gastos del concurso, conforme á derecho, y el crédito de D. José María Hernandez, por la hipoteca expresa y especial que lo garantiza conforme á la ley 33, tít. 13, Part. 3ª; y en cuanto al crédito que representa el Fisco federal, sigue inmediatamente á los anteriores, debiendo ser asegurada la cantidad de los \$ 2813 en los mismos términos que dispuso el Juez de Distrito en su sentencia respectiva, porque las razones alegadas por el Juez de alzada para no considerarlo en la graduacion, se encuentran destruidas por la real Orden de 12 de Noviembre de 1803, que previene que en los casos de descubierto de los Administradores y demas empleados de rentas públicas, sin esperar á la formal liquidacion de los alcances que resultan en su contra, se proceda desde luego no solo al embargo de sus bienes, sino tambien á exigir de sus fiadores, con calidad de depósito, las cantidades á que se hayan obligado. Conforme á esta terminante disposicion, no hay duda ninguna que el crédito del Fisco debe ser asegurado en la graduacion, lo cual no causa á los demas acreedores ningun perjuicio, porque debiéndose hacer el depósito en especie, facilmente podrán repetir la cantidad que resulte menor en el adeudo, así como por lo contrario el Fisco, les reclamará la mayor cantidad que se le deba. Por estos motivos el Procurador general concluye

pidiendo, que se revoque en todas sus partes la sentencia del Tribunal de Circuito de Monterey, confirmándose la de 1ª instancia por sus propios legales fundamentos; y se dé conocimiento al Ministerio de Hacienda, que en estos autos no consta que el concursado hubiera entrado al empleo de Administrador de papel sellado que tuvo á su cargo, dando las fianzas prevenidas por la ley.

México, Junio 29 de 1874.—*García Ramírez.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Abril 26 de 1875.

Vistos los autos promovidos por la Hacienda pública, con motivo de la cesion de bienes que D. Juan N. Margáin hizo en beneficio de sus acreedores, entre los cuales se encuentra el Fisco Nacional por la responsabilidad que resulta al expresado Margáin, como Administrador de la Renta del Papel Sellado. Vista la sentencia de primera instancia pronunciada por el Juzgado de Distrito del Estado de Nuevo Leon en 29 de Setiembre del año 1871; la de segunda instancia dictada por el Tribunal de Circuito del mismo Estado, en 10 de Marzo del año próximo pasado. Lo pedido por el C. Procurador General. Los apuntamientos de informe presentados por el C. Lic. Jesus M. Aguilar por la casa de Madero y Compañía. Lo alegado por el C. Lic. Manuel de Olagübel, en favor de las Sritas. hijas de Margáin, con todo lo demás que de autos consta, se tuvo presente y ver convino.

Considerando: que los gastos del concurso son preferentes en su pago á todos los demás acreedores por privilegiados que sean; 2º que el crédito de 540 pesos que Margáin reconoce al C. José M. Hernandez con hipoteca especial de la parte que estaba construida en la fecha de ese contrato, al viento Oriente de la casa número 128 de la calle de Matamoros en Monterey por escritura

pública otorgada en 30 de Julio del año 1866, es anterior á los demás acreedores, y por lo mismo debe ser considerado en primer lugar respecto de esa parte de la finca, atenta la ley 27, tít. 13, Part. 5ª, que terminantemente previene, que aquel que primero recibe la cosa á peños; esto sea pagado de preferencia, debiendo entenderse respecto de la cosa empeñada como lo manifiesta la ley 33 del mismo tít. y par. por aquellas palabras: «fuera ende en un caso»..... si el deudor es sobre peño, en entonces tal deudo como este que fuese primero ante debe ser pagado.

Segundo: que el C. Margáin con fecha 18 de Setiembre de 1866, entró á desempeñar su empleo de Administrador de la oficina de papel sellado en Monterey, quedando desde ese día afectos al Fisco nacional, por la hipoteca tácita que las leyes establecen, todos los bienes del expresado Margáin, reconociendo sin embargo la preferencia del crédito asegurado con hipoteca especial de fecha anterior, y cuya hipoteca á favor del Fisco dura, como dice la ley 25 del título y partida que se han citado, «fasta que cumplan á aquel pleyto que pusieron ante él.» Debiendo deducirse, que si bien el C. Hernandez es preferente respecto de parte de la finca hipotecada, su crédito no puede gozar esa preferencia respecto de los demás bienes del deudor comun, sino por el tenor de las leyes citadas, el Fisco es preferente en esos otros bienes: cuyo crédito se ha fijado en la suma de \$ 2,813.

Tercero: que despues del Fisco nacional, hay que tomar en consideracion el crédito de la casa de Madero, cedido al C. Francisco G. Prieto, por valor de \$ 2,000 y reconocido por escritura y con hipoteca especial de la otra parte construida posteriormente en la expresada finca y otorgada en 11 de Diciembre del citado año de 1866, es decir, con posterioridad á la hipoteca constituida á favor de la Hacienda pública, y por lo mismo, en vista de las leyes antes citadas, debe ser satisfecho Madero despues

del Fisco y antes que los otros acreedores de hipoteca general ó de fecha mas reciente y de los quirografarios.

Cuarto: que en lo relativo al crédito de D. José Casagne de \$ 1860 reconocidos tambien por escritura pública otorgada en 27 de Octubre del citado año de 1866, tiene hipoteca especial del resto de la misma casa, obrando las mismas razones que se han asentado anteriormente con referencia á Madero.

Quinto: que además de éstos acreedores hay otros que han justificado sus respectivos créditos, para los cuales deben considerarse en la categoría de acreedores quirografarios á los que las leyes designan el último lugar.

Sexto: que respecto de las Sritas. hijas del cedente, no puede considerárselas como acreedoras á título de dominio respecto de los gananciales que pudieran heredar por parte de la Sra. su madre D^a Concepcion Treviño de Pareya, puesto que entre ella y el Sr. su padre Don Juan N. Margán, había una sociedad tácita formada despues de la muerte de esa Señora.

Sétimo: que en semejante caso y como enseñan los tratadistas, las deudas de la compañía deben ser satisfechas del fondo común, y de lo que resulte pagadas estas, será lo divisible entre los socios. Por esto y de conformidad en parte con lo pedido por el C. Procurador general, se decreta: que se revoca la sentencia pronunciada por el Tribunal de Circuito y se reforma la sentencia pronunciada en 1^a instancia por el Juez de Distrito del Estado de Nuevo Leon, en los términos siguientes:

Primero: se pagaran de preferencia los gastos erogados con motivo del presente concurso.

Segundo: se satisfará el crédito de \$ 540 pertenecientes al C. José Hernandez y con preferencia al del Fisco; pero solo respecto de la parte de la casa que le fué hipotecada al expresado Hernandez, y cuyos límites están detallados en la respectiva escritura de imposición.

TOMO VII—PARTE IV.

Tercero: despues de este crédito será inmediatamente pagada, ó mejor dicho, asegurada de la manera que espresa dicha sentencia de 1^a instancia, la cantidad de \$ 281²; pero este segundo lugar debe entenderse solamente respecto de la finca hipotecada á Hernandez, porque el crédito del Fisco respecto de los demas bienes del deudor común, será preferente en su pago, satisfechos los gastos del concurso, á todos los demas acreedores que figuran en él.

Cuarto: pagados los créditos de Hernandez y el Fisco, con la especificación indicada, lo será el de Madero, pero gozando esta preferencia, respecto nada mas de la finca que le fué especialmente hipotecada.

Quinto: el crédito de D. José Casagne valioso en la suma de \$ 1860 será pagado inmediatamente despues de cubierto el Erario Nacional, cuya preferencia deberá entenderse como el anterior, respecto solo de la finca que le fué señaladamente hipotecada en la escritura respectiva.

Sexto: despues de estos créditos serán pagados los de los demás acreedores quirografarios.

Sétimo: si hecho efectivo el pago de la hipoteca á cada uno de los que tienen, no alcanzare para cubrir su crédito, se les considerará como acreedores no hipotecarios por la parte que les haya faltado.

Octavo: hechas todas estas deducciones, lo que resulte líquido será divisible por mitad entre las Sritas hijas del C. Juan N. Margán, y por razon de su legítima materna y el cedente.

Noveno: devuélvase las actuaciones al Tribunal de Circuito de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes.

Ilágase saber y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron la primera Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José María Iglesias.*

—M. Auza.—Ignacio M. Altamirano.—
L. Velazquez.—M. Zavala.—Enrique
Landa, secretario.

Es copia. México, Julio 21 de 1871.—
Gomez Eguarte, Oficial segundo.

COMPETENCIA

*Suscitada por el Juez 2º de Distrito,
al 1º de lo Civil de esta Capital, pa-
ra conocer del juicio hipotecario en-
tablado por la casa Martin Darán y
Cª contra Dª Elisa Tomásí.*

*Pedimento del C. Fiscal de la
Suprema Corte.*

El Fiscal interino dice: que en los autos sobre competencia que la Sala tiene á la vista, pretenden tenerla para conocer del juicio hipotecario promovido por los Sres. Martin Darán y Cª, contra la Sra. Elisa Tomásí, el Juez 2º de Distrito de la Capital y el 1º de lo Civil, ante el que está radicada la respectiva demanda.

La expresada Sra. Tomásí, dueña de las casas núms. 1 y 2 del Puente de Amaya, que forman la finca llamada "Meson de S. Juan Evangelista", consintió en que quedaran hipotecadas especialmente para garantizar el pago de \$220 28 que D. Amilcare Roncarí confesó deber al Supremo Gobierno, como parte del precio en que compró á este las haciendas de la Estanzuela y anexas, ubicadas en el Estado de Michoacan.

La escritura en que se hizo constar este crédito y la hipoteca constituida en garantía, fué de 13 de Enero de 1870. En ella se obligó el deudor á tener en calidad de depósito irregular la expresada cantidad, por el término de nueve años, y con causa de réditos á razon de un cinco por ciento anual, que pagará por tercios de años vencidos, comenzados á contar desde el 18 de

Diciembre de 1869, y con calidad de que por la falta de pago de dos tercios, se tendría por vencido el plazo de la imposición, cualquiera que fuese el que faltase para el vencimiento de la escritura.

Este crédito fué cedido por el Supremo Gobierno, por escritura de 12 de Abril del año pasado de 1873, á los Sres. Martin Darán y Cª, quienes por escrito de 21 del propio mes y año se presentaron ante el Juez 3º de lo civil demandando en juicio hipotecario á la Sra. Tomásí por el pago del capital, en razon de que habiéndose dejado de pagar dos tercios de réditos vencidos el día 18 del citado mes, debía darse por vencido el plazo de la obligacion, de conformidad con las estipulaciones convenidas en la escritura de 13 de Enero de 1870.

Declarada la procedencia del juicio hipotecario y fijada la cédula respectiva, la Sra. Tomásí se presentó por escrito de 2 de Mayo de 1873, oponiéndose á la demanda hipotecaria, con las excepciones siguientes: falta de personalidad en el actor, nulidad del título hipotecario, improcedencia del juicio iniciado.

Después de lo que va referido, bastará decir, que diversos incidentes dieron materia á las actuaciones judiciales, hasta que por auto de 21 de Mayo de 1874, se ordenó entre otras cosas, que se hiciera publicacion de probanzas, y que se entregaran los autos á las partes por cinco dias, para alegar de bien probado, de conformidad con lo prevenido en el art. 991 del Código de procedimientos.

Notificado este auto á los Sres. Martin Darán y Cª, se presentaron por escrito de 29 del mismo mes de Mayo, manifestando, que habiéndose opuesto entre otras excepciones á la demanda, la de *ilegitimidad de la hipoteca*, pedian que el Juzgado mandara hacer saber la existencia de estos autos y el estado en que se hallan, al C. Tesorero general de la Nacion y al Ministerio de Hacienda, á fin de que surta los efectos de *formal denuncia de eviccion* en este negocio.